

COMPETENCIA.

Juicio promovido por el Juez de 1ª instancia de Apam al 2º de lo civil de México, para conocer en el juicio ejecutivo, que sobre pesos sigue D. Manuel Madrid contra D. Rafael Piña.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que se vuelve á traer á la vista de esta respetable Sala, una competencia sobre la que ya en otra vez pronunció su fallo. En efecto, se vuelve ahora á suscitar disputa acerca de quién de los jueces, el 2º de lo civil de México, ó el de 1ª instancia de Apam, sea el competente para conocer en el juicio ejecutivo que D. Manuel Madrid, vecino de México, ha promovido á D. Rafael Piña, sobre pesos, y en cuyo juicio se mandó embargar el rancho de Acojuivalco, esto en la jurisdicción de Apam.

La razon, pues, porque, siempre á instancia de Piña, se ajita por segunda vez esta cuestion, se hace hoy consistir, en un verdadero pretesto. Se alega que puesto que esta Suprema Corte, al pronunciar su fallo de 22 de Agosto próximo pasado se fundó en la circunstancia de que el Juez de Apam, no sostenia su jurisdiccion, y siendo precisamente los jueces, y no los litigantes, las partes legítimas que deben intervenir en semejantes recursos, no sosteniéndose la cuestion por parte del Juez de Apam, no hay en realidad competencia suscitada. Partiendo de ese principio D. Rafael Piña, se presenta hoy al Juzgado de ese lugar, exitándolo á que en toda forma, y tomando esa autoridad una intervencion muy directa, entable la competencia de que hasta cierto punto se habia eliminado antes.

El Juzgado de Apam, cuyo personal ha variado últimamente, creyó buena la razon alegada por Piña, y si bien es cierto que aún todavía, no declara si acepta ó no la competencia, es decir, que aún no está en-

tablado el recurso, sin embargo, como ya dirigió al Juez de México el oficio inhibitorio, esta autoridad no puede continuar sus procedimientos; se le ha puesto una verdadera traba, que paraliza su accion. En vano han sido, para removerla, los diversos oficios que el Juzgado de México ha dirigido al de Apam, para que dé una contestacion definitiva; inútil ha sido que el primero haya manifestado al segundo, que si dentro de tres dias no remitía su informe, él entonces lo verificaría de sus respectivas actuaciones á esta Corte Suprema, como en efecto lo ha hecho. Todo ha sido estéril por parte del Juzgado de México; no parece sino que el de Apam, tiene un fin marcado en entorpecer la marcha del juicio promovido por Madrid á Piña. El Fiscal que así lo entiende, que ha vuelto á fijar su atencion en las razones alegadas en favor de la jurisdiccion del Juez de Apam, y que ha visto son absolutamente las mismas que ya en otra ocasion se dedujeron ó hicieron valer, sin mas novedad, sino que hoy la parte de Piña viene esforzando las razones que se tomaron en cuenta para decidir que los jueces locales, al competir con los de otros Estados deben sujetarse á leyes generales, cuya conducta hace á Piña inconsecuente consigo mismo: de todo esto pudiera el suscritor pedir á esta respetable Sala, desechara de plano un recurso, una pretencion que recomienda muy poco los conocimientos jurídicos del Juez que la formula, á la vez que envuelve cierta falta de atencion á la muy digna que se merece este Tribunal, el primero de la Nacion.

En efecto, hace en primer lugar formarse mala idea de los conocimientos jurídicos del Juez de Apam, porque lo que intenta nada menos, es hacer ilusorio un fallo que ha causado ya ejecutoria; es suscitar cuestion sobre un punto fallado ya y sentenciado por el Tribunal, y respecto del que no se admite ningun recurso. En segundo lugar, envuelve una falta de respeto á la dignidad de esta Corte Suprema, porque esa misma pretencion, y la manera de fundar-

la, está indicando claramente el poco aprecio que le ha merecido al Juez de Apam, la desición de aquella.

Si el suscrito viera que hoy, al menos se alegaban otras razones, diversas de las que en otra vez se adujeron en esta misma competencia, para sostener la jurisdicción del Juez que ahora vuelve á suscitarla, habría siquiera motivo para excusarlo; pero no siendo así, el Ministerio público tiene sobrada razón para sospechar que ya no se insiste en este punto, sino por tenacidad, y acaso tal vez por sacar adelante, á viva fuerza si fuera posible; un principio demasiado exagerado, una teoría sobrenatural infundada, una inteligencia completamente absurda de nuestras instituciones sociales. Se pretende dar á la soberanía é independencia de los Estados tal grado de estension, que ante ellas casi se nulifican los solemnes y graves compromisos que han contraído entre sí, por medio del indestructible pacto fundamental de la República.

Considerando todo esto, el que habla, pudiera pedir, y se cree autorizado para ello, el que sin darle mas importancia al actual incidente se devolvieran sus actuaciones al Juez de lo Civil de esta Capital, para que obrara con arreglo á derecho; pero queriendo el suscrito en cuanto ello le sea posible, conciliar todos los intereses, tomando en cuenta los ruinosos, cuanto acaso irreparables perjuicios que se seguirían de semejante providencia, y sobre todo, fijándose el Ministerio Fiscal, en la gravedad y justificación con que esta Corte Suprema procede en todos sus actos, ha creído mas conveniente y equitativo presentar la siguiente proposición, que pide á la Sala se digne aprobar.

Única: Dígase al Juez de primera instancia de Apam, que si dentro del tercero día no remite á esta Corte Suprema las actuaciones que haya formado, con motivo de la competencia que ha vuelto á iniciar al Juez 2º de lo Civil de esta capital, y el informe respectivo, se le tendrá por el mismo hecho desistido de dicho recurso; teniendo

cuidado la Secretaría de dar cuenta vencido el plazo.

México, Enero diez y siete de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Altamirano*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México Enero veintuno de mil ochocientos setenta y uno.

En atención á que el punto de competencia de jurisdicción en que se insiste por parte del Juez de 1ª instancia de Apam, en el Estado de Hidalgo, para conocer con inhibición del 2º del ramo de lo civil de esta ciudad de México, del juicio ejecutivo sobre pesos promovido por D. Manuel Madrid contra D. Rafael Pina, está resuelto definitivamente por la sentencia que esta Sala pronunció en veintidos de Agosto del año próximo pasado: á que desistido de antemano el Juzgado de Apam de la Competencia, no debe suscitarse de nuevo, porque aquella sentencia tiene la fuerza de cosa juzgada; pues aunque el personal del Juzgado sea ahora diverso del que desistió, no por eso puede decirse que el Juzgado ha variado, pues el ejercicio de la jurisdicción no es personal, sino moral, y además el Juez que sucede á otro en el despacho de los negocios de un juzgado no tiene autoridad para dar por insubsistentes las resoluciones de su antecesor, puesto que "*Par in parem non habet jurisdictionem*"; y en atención por último, á que la insistencia del nuevo personal del Juzgado de Apam en conocer del juicio mencionado es contrario á la sentencia pronunciada por esta Sala, se decreta que no hay competencia que dirimir actualmente, y que se esté á lo mandado con fecha veintidos de Agosto último.

Devuelvânse al juzgado 2º de lo civil de esta ciudad los autos, con copia certificada de este fallo, para los efectos consiguientes; remitiéndose copia igual, para los mismos efectos, al juez de primera instancia

de Apam. Hágase saber y archívese á su vez el toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. (Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Azaa.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el ciudadano Hilario Prieto, por violación de las garantías que otorgan los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Federal.

ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO
HILARIO PRIETO.

Ciudadano Juez de Distrito:

Hilario Prieto, vecino de esta ciudad, ante V. con el debido respeto, ejercitando el recurso de amparo, comparezco y digo: que por el documento que acompaño, se impondrá, de que la junta de Diputados que se ha dado el nombre de Legislatura, me ha suspendido en los derechos de ciudadano, sin que haya dado motivo para ello, y sin que sea competente para imponer, ni esa, ni ninguna otra pena que implique verdaderamente tal nombre.

Como Diputado suplente del ciudadano Francisco Bustamante, fui llamado por los ciudadanos Antonio Quesada y Julian de los Reyes, que se titulaban Secretarios del Congreso del Estado, para que fuese á remplazar al expresado ciudadano Bustamante, á quien dicha Junta, abusando de su posición, escarnesiendo las instituciones y apoyada en una misteriosa protección, había condenado á la misma pena que yo he sido sentenciado hoy. Pero como semejante pro-

cedimiento fué ejecutado por siete Diputados que no forman el *Quorum* de la II. Legislatura, y el acto era *atentatorio*, injusto y anticonstitucional, yo no quise prestarme á concurrir al Salón de Sesiones, porque mi presencia en el Congreso implicaba el reconocimiento de una corporación viciosa en su formación, y la calificación de legalidad, del procedimiento que privaba al propietario de ejercitar las funciones que el pueblo le había encomendado con tanto acierto.

Me resistí, pues, manifestando que no reconocía en aquella Junta á la Legislatura legítimamente reunida, ni tampoco, postestad en ella para haber privado de la representación popular al propietario, suspendiéndolo de los derechos de ciudadano, y de consiguiente, que no me consideraba legalmente llamado á suplir una vacante que no había.

Esta excusa, tan legítima para todos los que quieran sujetarse á las disposiciones de la ley, fué para los ciudadanos Diputados, un acto de resistencia por mi parte; y constantes en su sistema de *arbitrariedades y caprichos*, dictaron, contra mí, la misma providencia que tomaron contra el propietario á quien debería suplir, y contra otros propietarios que no habían concurrido á las sesiones, sin embargo de estar algunos de ellos enfermos y constar esto á los mismos ciudadanos Diputados.

Se me destituyó, pues, del derecho que tengo á representar al Partido de la Capital, y este derecho, adquirido por el sufragio del pueblo, es una propiedad de que estoy en posesión, y de la cual se me ha privado contra lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General.

Se me condenó á una pena grave, porque no solamente importa la privación de los derechos de ciudadano, sino que imprime, sobre mí individuo, la mancha de ser indigno de ejercer un empleo público; y esto se ha hecho por un Tribunal que no ha establecido la ley, infringiéndose el último miembro del artículo 14 del mismo código: